

Un Gobierno para frenar la deriva que nos lleva a una nueva recesión

MANUEL MIÑÉS MUÑOZ

DIRECTOR-GERENTE DE LA CÁMARA DE CONTRATISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Los españoles el próximo día 28 de abril y los valencianos por partida doble, estamos llamados a las urnas, cuando ya son evidentes los signos de desaceleración, con la caída del empleo, exportaciones, consumo interno, hundimiento de la industria, un aumento del déficit y un frenazo de nuestro PIB

El actual Gobierno socialista, forzado por podermitas e independentistas –a las puertas de unas elecciones, y con medidas de indudable alcance populista– está repitiendo los mismos errores que cometió Zapatero en 2007, desoyendo los evidentes síntomas de desaceleración económica y propiciando un desafortunado incremento del gasto público.

Ante los fallidos presupuestos para el 2019, que contemplaban una subida de impuestos de hasta 8.000 millones de euros, de los cuales las tres cuartas partes recaían sobre las empresas creadoras de empleo y riqueza, censurados por el Banco de España, la Unión Europea y la propia AIREF, el presidente Sánchez, usando el Decreto-Ley, y rompiendo la neutralidad que impone el periodo electoral, persiste en hipotecar de nuevo al país. Con un PIB de 1.206.978 millones de euros que cerró el 2018, con un 2'4% de incremento, frente al 2'8% habido en el 2017; con 285.024 millones de exportaciones que crecieron (un 2'9%) por debajo de la media de la zona euro (4'4%); con 126.879 parados más desde que Sánchez llegó a la Moncloa (junio 2018), alcanzando 3.289.040 personas; con un déficit que frente al 1'3% sobre el PIB comprometido con Bruselas, gracias a los decretazos de «los viernes sociales» llegaremos al 2'4%; con una tasa de producción industrial del -5'9%, la segunda mayor caída de la UE, solo superada por Irlanda, con una caída de matriculaciones de vehículos de 9% y un descenso del consumo del cemento del 8%, vamos hacia una 'caída libre'.

Y todo ello desoyendo las advertencias del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, acerca de que ante la desaceleración económica y con el incremento del gasto público estamos comprometiendo nuestro próximo futuro a mucho peor que con la crisis de Rodríguez Zapatero, ya que ahora tenemos un déficit estructural de 35.000 millones de euros, una deuda pública de 1'17 billones de euros (25.160 euros por habitante) y una necesidad de seguir recurriendo al crédito exterior de 220.000 millones de euros anuales para poder hacer frente a nuestras obligaciones contraídas.

Ante esta realidad indiscutible, el aumento del permiso de paternidad (225 millones de euros); la cotización de las cuidadoras no profesionales (262 millones); los subsidios para parados de larga du-

ración mayores de 52 años (270 millones), sumados a los 2.600 millones por revalorización de las pensiones y su indexación al IPC, y otros 867 millones para la subida del sueldo a los funcionarios, junto con los 4.200 millones de déficit estructural, supone un desfase de 13.000 millones de euros, sin contraprestación alguna por la vía de ingresos.

Ante los comicios del próximo 28 de abril, los españoles debemos tener claro que, aunque desde la Moncloa, con la presión de Podemos, estén negando unas previsiones que nos retrotraen a los años 2007-2008 de amarga memoria (con cinco millones de parados...) la recesión está ahí, y tras nueve meses firmando hipotecas con vencimiento a medio plazo hay que cambiar el rumbo, y ello merece una reflexión serena del elector ante las urnas.

Cuando los vientos de cola amainan, el Gobierno debe estar preparado para insuflar energía a la economía. Ello pasa –no hay otra solución mágica– por facilitar al máximo a los empresarios la contratación de empleados. Y si hemos visto que con la política de liberalización del mercado de trabajo –abaratando el coste del despido, descentra-

lizando la negociación colectiva, etc.– hemos conseguido en cinco años rebajar el paro del 27% al 14% ¿por qué abandonar esta senda? Está bien ayudar a los parados de más de 52 años, pero ¿no estaría mejor facilitarles un nuevo puesto de trabajo, con incentivos a su contratación?

Ante los anuncios de los llamados «viernes sociales» de impronta repercusión electoral para los colectivos afectados, basados en subvenciones y subsidios, sepamos que su coste social, necesariamente, recaerá sobre las empresas y los trabajadores con ingresos me-

dios... todo ello cuando el desfase entre ingresos por cotizaciones y gastos en pensiones supera los 17.000 millones de euros.

El presidente del Gobierno, doctor en Económicas, y su vicepresidenta Carmen Calvo, deberían desterrar de su vocabulario aquello de «el dinero público no es de nadie!» y «governar es gastar en temas sociales». Quizás tras el 28-A ellos puedan ir al banquillo de la oposición, con unas prebendas de por vida garantizadas, pero dejarán al resto de los españoles sumidos en una nueva recesión, paro y penurias.

El impacto de otra crisis sería tremendo, con dificultades para pagar la deuda y un posible rescate del país que vendría acompañado de recortes drásticos del bienestar social. Todavía hay tiempo para reaccionar y evitar el desastre. Los ajustes tras las elecciones generales están servidos.

Así me manifiesto como ciudadano valenciano que rehúye las políticas cortoplacistas y apuesta por decisiones valientes y a futuro.



•• ÁLEX DOMÍNGUEZ